

**DALMIS ALEJANDRO CASTILLO CRUZ**

**PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD EN APLICACIÓN AL PRINCIPIO IN  
DUBIO PRO REO COMO CAUSA O FACTOR DE ATRIBUCIÓN DE  
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL AL ESTADO BAJO EL  
TÍTULO DE IMPUTACIÓN SUBJETIVO**

**(Maestría en Derecho Público)**

**Bogotá D.C., Colombia**

**2020**

**UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA**

**FACULTAD DE DERECHO**

**MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO**

**Rector:**

**Dr. Juan Carlos Henao**

**Secretaria General:**

**Dra. Marta Hinestrosa Rey**

**Directora Departamento**

**Derecho Constitucional:**

**Dra. Magdalena Correa Henao**

**Director de Tesis:**

**Dr. Diego Moreno Cruz**

**Examinadores:**

**Dr. Gonzalo Ramírez Cleves**

**Dr. Luis Felipe Vergara Peña**

## RESUMEN

El presente escrito hace un análisis de la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto cualquier persona a quien en juicio penal se exoneró de responsabilidad penal en aplicación del principio de *in dubio pro reo*, como causa o factor de atribución de responsabilidad civil extracontractual al Estado. Para ello se estudian las diferentes posturas que ha asumido el Consejo de Estado, especialmente aquella según la cual, se debe juzgar bajo el régimen de imputación objetiva utilizando el título de daño especial, con el propósito de demostrar que esa no es la manera correcta de estructurarla, en virtud a que es necesario valorar la conducta del operador judicial que ordenó la restricción a la libertad, debido que la injusticia no se predica automáticamente por el solo hecho de contar con una sentencia penal favorable, por tanto, el análisis de la responsabilidad no se agota con la sola comprobación de la privación de la libertad y la sentencia absolutoria, sino que en todo caso es necesario demostrar el incumplimiento de los deberes constitucionales y legales por parte de quien impuso la medida, teniendo en cuenta que la forma en que ocurren los hechos resulta ser definitiva para estructurar los elementos de la responsabilidad.

**Palabras clave:** Privación injusta de la libertad, principio *in dubio pro reo*, responsabilidad civil extracontractual, título de imputación subjetivo, daño especial.

## CONTENIDO

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>5</b>
<b>1. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD .....</b>	<b>7</b>
1.1. La libertad. No es un derecho fundamental absoluto.....	7
1.2. La detención preventiva como límite de la libertad .....	12
1.3. Conceptualización del principio in dubio pro reo .....	14
1.4. ¿Cuándo es injusta la privación de la libertad?.....	16
<b>2. TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL 20</b>	
2.1. Breve reseña de lo que se entiende por responsabilidad civil extracontractual del Estado .	20
2.2. Títulos de imputación de responsabilidad civil extracontractual .....	24
2.3. Aproximación a la forma de imputación objetiva .....	28
<b>3. ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DEL ESTADO EN LOS CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO .....</b>	<b>30</b>
3.1. Privación injusta de la libertad en aplicación al principio in dubio pro reo como causa o factor de atribución de responsabilidad civil extracontractual al Estado.....	30
3.2. Postura del Consejo de Estado: Entre el título de imputación objetivo y el subjetivo .....	31
3.3. Postura de la Corte Constitucional: Título de imputación subjetivo .....	40
<b>4. ¿POR QUÉ EL TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA NO ES EL MÁS ADECUADO PARA ESTRUCTURAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DEL ESTADO EN LOS CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CUANDO LA PERSONA PROCESADA FUE ABSUELTA EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO? .....</b>	<b>41</b>
<b>5. CONCLUSIONES.....</b>	<b>45</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>47</b>

## INTRODUCCIÓN

Con la expedición de la Constitución Política de Colombia se estableció expresamente para el Estado Colombiano la obligación de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos causados a la sociedad o alguno de sus miembros. Estos daños le son imputables cuando son causados por la acción u omisión de sus autoridades públicas, como consecuencia del incumplimiento, del defectuoso o tardío cumplimiento de sus deberes fundamentales, o simplemente por el cumplimiento de sus actividades, consagradas tanto en la misma carta política como en la ley. Así quedó establecido en su artículo 90.

Bajo este entendido, una vez se ha determinado que por acción u omisión de algún agente público el Estado generó un resultado dañino, la siguiente fase consiste en atribuir responsabilidad civil extracontractual al Estado por ese resultado a través de los diferentes criterios –subjetivo y objetivo- desarrollados por la jurisprudencia y la doctrina.

Uno de esos eventos de configuración de responsabilidad civil extracontractual se da cuando en el desarrollo de un proceso penal, cualquier persona es privada preventivamente de la libertad, pero como resultado del trámite de la actuación es favorecido con una sentencia en la que se aplica el principio *in dubio pro reo*, esto es, que existe duda sobre la participación en los hechos o la comisión de la conducta de esa persona, por la cual su presunción de inocencia no se pudo desvirtuar.

En dichos eventos, desde la vigencia de la actual constitución política, el Consejo de Estado ha venido declarando la responsabilidad estatal por la privación injusta de la libertad, pasando del régimen subjetivo de imputación al régimen objetivo en la modalidad de daño especial desde el año 2006, ratificando esta posición en la sentencia de unificación proferida dentro del expediente 23.354 en el año 2013, y volviendo nuevamente a la primera posición, esto es al régimen subjetivo, como lo hizo con la sentencia del 15 agosto de 2018 –exp. 46.947-, en la que varió la postura asumida en el 2013.

La hipótesis que se pretende demostrar en este escrito es que la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, derivada de los perjuicios causados a cualquier persona que, procesada dentro de una actuación penal, resultó absuelta en aplicación del principio *in dubio pro reo*, no puede fundarse en el régimen de imputación objetiva bajo el título del daño especial, teniendo en cuenta que lo injusto de la privación no puede predicarse automáticamente por el solo hecho de obtener una sentencia favorable en aplicación del mencionado principio, sino que se requiere en cada caso particular que se analicen circunstancias que llevaron al Estado a privar preventivamente de la libertad a la persona, es decir, su estudio debe efectuarse bajo los parámetros de la responsabilidad subjetiva.

Para ello, se debe tener en cuenta que el régimen de responsabilidad objetivo no comporta el análisis de la culpa en la conducta activa o pasiva generadora del daño como se estudia en el sistema subjetivo, sino que la razón principal para atribuir responsabilidad al Estado es que ella se genera por el rompimiento de las cargas públicas, esto es, la demostración de que en un caso concreto se quebrantó de manera injustificada el principio de igualdad material de la persona frente a la ley, circunstancia que se aleja de la valoración que debe efectuarse sobre la actuación de la autoridad judicial para adoptar la decisión de someter a restricción de la libertad, a quien demande la responsabilidad del Estado cuando la decisión final del proceso penal lo favoreció porque predominó la duda sobre su participación en el delito investigado.

La estructura metodológica plantea desarrollar el tema, abordando en primer lugar el aspecto filosófico, constitucional y jurisprudencial de lo que debe entenderse por privación injusta de la libertad, definiendo en que consiste la libertad como derecho, porque no es un derecho absoluto, en qué circunstancias se puede limitar y cuáles son los requisitos para ello. Así mismo, se conceptualizará el principio de *in dubio pro reo* y cuando la privación de la libertad deviene en injusta (Sección 1).

En segundo lugar, se efectuará una síntesis teórica sobre lo que se entiende por responsabilidad civil extracontractual, los títulos de imputación y de estos, se

profundizará en la forma objetiva de atribución de responsabilidad a efectos de exponer las bases teóricas que la estructuran (sección 2).

Posteriormente se determinará cómo debe entenderse la privación injusta de la libertad en aplicación al principio constitucional *in dubio pro reo* como causa o factor de atribución de responsabilidad civil extracontractual al Estado, para luego, efectuar una descripción de como el Consejo de Estado ha concebido la forma de imputación objetiva de responsabilidad por los daños ocasionados por el Estado Colombiano en dicho evento, puntualizando como ha elaborado su doctrina respecto al tema y evidenciando como en el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha discurrido el debate entre el régimen subjetivo y el objetivo. Dicha postura será comparada con la asumida por la Corte Constitucional, en aras de establecer que frente a la cuestión cada Corte plantea caminos diferentes para imputar responsabilidad al Estado (Sección 3).

Finalmente se expondrá que el título de imputación de responsabilidad objetiva no es el más adecuado para estructurar la responsabilidad civil extracontractual del Estado en los casos de privación injusta de la libertad cuando la persona procesada fue absuelta en aplicación del principio de *in dubio pro reo*, sino que para ello se debe recurrir al régimen subjetivo –falta en el servicio- (Sección 4).

Por último, se ofrecerán unas conclusiones generales.

## **1. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD**

### ***1.1. La libertad. No es un derecho fundamental absoluto***

La Carta política Colombiana, emblemática por su amplio reconocimiento de los derechos y garantías individuales, consagra como pilar esencial la libertad<sup>1</sup> bajo un criterio tripartita de ser valor, principio y derecho fundamental, circunstancia

---

<sup>1</sup> Bernal Pulido (2005) expone que uno de los pilares constitucionales del Estado es garantizar a las personas un ámbito de libertad que les es inherente y que está protegido contra las intervenciones provenientes del Estado y de las demás personas. En este sentido al establecer la constitución como fin esencial reconocer la libertad personal, le otorga la categoría de derecho fundamental, sin más limitaciones que las que imponga la ley (p. 247).

que conlleva a que el Estado y los asociados la deben garantizar y respetar respecto de cualquier persona.

De acuerdo con lo anterior, la libertad constituye “la base axiológica-jurídica sobre la cual se construye todo el sistema normativo” (Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, S-T-406,1992), en virtud a que inspira la formulación de los preceptos constitucionales sobre su reconocimiento, por ser inherente o esencial a la persona humana, permite su existencia en sí misma, por ser una derivación directa, inmediata y evidente de los valores sociales (Chinchilla, 1999).

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) determina que libertad es “poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites que los necesarios para garantizar a cualquier otro hombre el libre ejercicio de los mismos derechos; y estos límites sólo pueden ser determinados por la ley”.

Por su parte, la concepción de libertad de Kant citado por Osuna (2017, p. 350) bajo el principio de la autonomía de la voluntad, establece que dicho principio tiene como propósito en el ámbito privado “la elección individual acertada y la realización de una concepción personal del bien” y en la esfera de lo público “la elección en común con otros y la realización de una concepción política de lo justo y de lo bueno”.

Sobre la tesis de Kant, Bernal Pulido (2005) hace hincapié en la idea que se “atribuye al Estado, y en particular a la legislación, la labor fundamental de proteger y armonizar la libertad de todos los individuos” (p. 388). En esta misma obra, al estudiarse la concepción de John Rawls, teórico del derecho que se ha ocupado de estudiar la libertad, se establece que la persona se distingue por dos facultades morales que son esenciales en la formación del núcleo de sus atributos como sujeto libre.

La primera facultad moral consiste en la aptitud de tener un sentido de la justicia –capacidad de ser “razonable”, (...). Por su parte, la segunda facultad se define como la “capacidad para albergar una



concepción del bien” –capacidad de ser “racional”-. La primera facultad moral se identifica con la disposición humana para tomar parte de manera consciente en la cooperación social y para respetar los términos en que ésta se desenvuelve. La segunda facultad moral, en cambio, se refiere a la capacidad de proponerse objetivos y de “perseguir una concepción de lo que consideramos que en la vida vale la pena”. (Bernal Pulido, 2005, p. 389)

Por otro lado, resulta trascendente para este escrito referirse a la teoría de libertad de Isaiah Berlin, quien en su conferencia inaugural de la cátedra Teoría Social y Política en la Universidad de Oxford en 1958, planteó la existencia de dos conceptos de libertad, denominados libertad negativa y libertad positiva.

En cuanto a la libertad negativa, propone Berlin (1958) que se es libre “en la medida en que ningún hombre o ningún grupo de hombres interfieren en mi actividad. En este sentido la libertad política es, simplemente, el ámbito en que un hombre puede actuar sin ser obstaculizado por otro” (p. 3).

En tanto, la libertad positiva “se deriva del deseo por parte del individuo de ser su propio dueño. Quiero que mi vida y mis decisiones dependan de mí mismo, y no de fuerzas exteriores, sean estas del tipo que sean” (Berlin, 1958, p. 8).

Esta postura determina que, por un lado, el individuo actúa de manera autónoma sin que los demás, incluido el Estado, lo obstaculicen -libertad negativa-; y por otro, la persona debe tener la posibilidad de autodeterminación a partir del ejercicio de su propia voluntad y sus propias acciones -libertad positiva- (García, 2016, párr. 7-9).

Se considera entonces que la libertad como derecho fundamental, es la posibilidad que tiene toda persona de hacer u omitir en el ejercicio de su voluntad hasta donde el derecho de los demás se lo permita, dentro de los límites constitucionales y legales previstos. De ahí que se pueda determinar que esta garantía posee dos esferas, una de acción y otra de abstención, que le permiten al

ser humano desenvolverse en la sociedad, en tanto su ejercicio no afecte a otros o devenga en inconstitucional.

La esfera de acción resulta de la posibilidad que se otorga al individuo de llevar a cabo todos aquellos actos que, dentro de los límites constitucionales, le permitan expresar sus ideas, actuar de determinada forma, desplazarse por donde se quiera, o ejercer su voluntad para actuar dentro de los ámbitos estatales en los que decida desarrollarse.

En contra partida, la esfera de omisión se materializa cuando así mismo, la persona de forma voluntaria se abstiene de desplegar actuaciones o dejar de hacer cosas que en su parecer no debe realizar, pues no debe entenderse que libertad es solamente poder hacer todo aquello que se quiera, es también decidir no hacer lo que no se quiera o con lo que no se esté de acuerdo.

Definida así la libertad, “ello implica, en principio, las personas pueden hacer todo aquello que no les esté legalmente prohibido, y que solo están obligados a hacer aquello que les manda la Constitución y las leyes” (Naranjo, 2014, p. 537). Y no podría entenderse de otra manera, en la medida que gozar de la capacidad de actuar o autodeterminarse permite tomar decisiones individuales que solo pueden estar sometidas a la regulación constitucional y legal, no a la voluntad del gobernante.

Sin embargo, tal como se manifestó desde la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, este derecho tiene límites, que en palabras de Bernal Cuellar y Montealegre Lynett (2013) se traduce en que no puede ser entendido de manera absoluta, si se tiene en cuenta que de garantizarse de tal forma, su ejercicio en la sociedad conllevaría irresolublemente al conflicto entre las personas, por ello es necesario “hacer compatible el ejercicio de la máxima libertad de todos los individuos lo que demanda su restricción y justifica la existencia del Estado” (p. 109).

La libertad como derecho, puede ser entonces objeto de limitaciones o restricciones en su ejercicio, dada su propia naturaleza y relación con las normas

constitucionales, sin embargo, tal limitación no puede llegar al extremo de anular el derecho, pues existe límite a los límites de un derecho fundamental que es su núcleo o contenido esencial (Vila, 2012).

El núcleo esencial “es el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y particulares. Al núcleo esencial pertenecen aquellos elementos sin los cuales el derecho deja de ser lo que es” (Vila, 2012, p. 498), es decir, es el aspecto básico que identifica un derecho y a su vez lo diferencia de otro<sup>2</sup>.

En el caso específico de la libertad, el núcleo esencial se compone:

de una parte, por la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios y, de otra, por la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente. (Corte Constitucional, Sala Plena, S-C-301,1993, p. 20)

De esta manera, la posibilidad de limitación en el Estado constitucional debe estar expresamente consagrada en la carta política, que a su vez le entrega al legislador la competencia para regularla, teniendo en cuenta que como cuerpo colegiado, democráticamente elegido y representativo de la sociedad, debe deliberar a efectos de establecer de forma clara, precisa y con apego a los postulados fundamentales, bajo qué circunstancias será permitida la privación de la libertad

---

<sup>2</sup> Respecto de la definición del núcleo o contenido esencial de los derechos fundamentales, la Corte Constitucional la ha efectuado de la siguiente manera: “el núcleo esencial del derecho fundamental es aquella parte de su contenido que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección” (Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, S-T-426,1992).

de las personas, consagrando así mismo los mecanismos de defensa idóneos para que dicha facultad no sea ejercida arbitrariamente<sup>3</sup>.

Finalmente es preciso indicar sobre este aspecto, que la Corte Constitucional (1997) ha determinado que:

el constituyente no concibió la libertad individual a la manera de un derecho absoluto, inmune a cualquier forma de restricción; todo lo contrario, fluye del propio texto superior que en determinados casos en que tal limitación tenga lugar han de venir fijados por la ley, siendo claro, en consecuencia, que tratándose de la libertad personal la Constitución Política establece una estricta reserva legal (S-C-327, p. 10).

En síntesis, desde la teoría de los derechos fundamentales y así lo entendió el constituyente, el ejercicio de la voluntad personal para actuar o abstenerse de ello cuando así lo considere pertinente, es una garantía que debe ser protegida por el Estado en aras de la autodeterminación de cada individuo de su población<sup>4</sup>, garantía que para poder ser desplegada debe ser limitada de conformidad como lo disponga la carta política, pues solo así, la convergencia de las libertades encontrara una práctica equilibrada y evitará el caos social.

### ***1.2. La detención preventiva como límite de la libertad***

En Colombia la ley de procedimiento penal establece como uno de sus principios rectores y garantías procesales la libertad, determinando que las personas no podrán ser privadas de la misma, salvo en las condiciones que fije la misma ley. (Ley 906, 2004).

---

<sup>3</sup> Frente al poder de limitación de la libertad, siguiendo a Berlin, se ha reconocido que es latente la dificultad para determinar el límite entre la libertad privada y la pública, “es decir, dónde pueden empezarse a imponer restricciones”, teniendo en cuenta que en un Estado en el que se garantice la pluralidad no se puede ser absolutamente libre y se debe ceder en la libertad propia para proteger la de los demás (García, 2016, párr. 12).

<sup>4</sup> En los ámbitos del derecho constitucional y el derecho internacional, dentro del estudio de la teoría del Estado, la población ha sido considerada como su elemento esencial, en virtud a que se trata del componente humano que decide organizarse política y jurídicamente para dar origen al mismo, tal como lo enseñan Ramírez Germán (2017) y Naranjo (2014).

Esta disposición normativa tiene su fundamento en la Carta Política, que consagra que toda persona es libre y no puede ser detenida, reducida a prisión o arresto, ni detenida “sino en virtud de mandamiento escrito por autoridad competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley” (Const., 1991, art. 28).

A su turno, el artículo 250 de la Constitución le asigna a la Fiscalía General de la Nación la titularidad de la acción penal y la obligación de llevar a cabo el ejercicio de la mencionada acción, adelantando la investigación de los hechos que revistan las características de un delito sin que pueda suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal. Para tal efecto, en esta norma la propia carta consagra la posibilidad que la ley le otorgue facultades a esta institución para realizar capturas.

Como se evidencia, frente a la atribución de restringir la libertad por parte del Estado a través de la autoridad competente, se ha determinado que tal facultad debe ser regulada por el legislador, imponiendo límites claros y suficientemente justificados, de tal suerte que la privación de la libertad sea excepcional.

De esta manera, ha entendido la Corte Constitucional

El principio de legalidad se convierte así en una garantía insustituible para la libertad individual, pues ésta sólo podrá ser afectada por los motivos previamente definidos en la ley, y conforme a un procedimiento también previamente señalado en ella, tarea ésta del legislador que además se encuentra limitada y puede ser objeto de control por parte del juez constitucional, pues ha de desarrollarse con el respeto de los postulados y preceptos superiores y específicamente de los principios de razonabilidad y proporcionalidad (S-C-730, 205, p. 15).

Bajo los anteriores parámetros, a nivel legal se ha establecido la detención preventiva como un límite a la libertad, entendida por la Corte Constitucional (1997) citada por (Arenas, 2014), como una medida cautelar tendiente a “asegurar a las personas acusadas de un delito para evitar su fuga y garantizar así los fines

de la instrucción y el cumplimiento de la pena que, mediante sentencia, llegare a imponerse, una vez desvirtuada la presunción de inocencia y establecida la responsabilidad penal del sindicado” (p. 8).

La consagración de la detención preventiva como restricción a la libertad personal, contiene unos fines primordiales encaminados a garantizar que en un caso concreto de investigación penal se asegure, por un lado, que la persona investigada comparezca al proceso, y por otro, la integridad de la actuación en aras a que esa persona no interfiera en la misma, o altera, oculte o destruya pruebas fundamentales para el esclarecimiento de los hechos, sin que por ello pierda su presunción de inocencia.

Esta medida cautelar busca la consecución de un fin constitucional legítimo, teniendo en cuenta que, si bien todo individuo goza de su libertad personal, este derecho no es absoluto y su restricción se justifica en la medida en que el Estado, consiente de la obligación de otorgar la garantía de ese derecho, debe actuar en defensa del ordenamiento jurídico y el interés general que busca proteger con el ejercicio de la acción penal.

Sin embargo, la posibilidad de adoptar una medida de tal magnitud implica que la situación jurídica de la persona sea resuelta en un tiempo razonable y que la misma no se adopte de manera arbitraria o caprichosa por parte de la correspondiente autoridad judicial.

### ***1.3. Conceptualización del principio in dubio pro reo***

En el ámbito del derecho penal, el *in dubio pro reo* se refiere al principio según el cual si el Juez tiene duda sobre si el acusado cometió el delito que se le imputó durante el respectivo juicio, al momento de proferir el fallo debe absolverlo, debido a que no existe prueba que desvirtúe la presunción de inocencia con grado de certeza.

Este principio es una materialización del principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución Política de Colombia (art. 29), el cual a su vez está estipulado en el Código de Procedimiento Penal que dispone que “toda duda que

se presente se resolverá a favor del procesado” (Toro y Cajicá, 2016, p. 619) y esta duda puede ocurrir en cuanto a la realización del hecho o la culpabilidad de la persona (Corte Constitucional, Sala Plena, S-C-774, 2001).

A nivel internacional, los principios de presunción de inocencia e *in dubio pro reo* se encuentran consagrados como garantía judicial en los artículos 8 de la Convención Americana de Sobre Derechos Humanos<sup>5</sup> y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos<sup>6</sup>.

De acuerdo con estos criterios, habrá lugar a la absolución en aplicación al principio *in dubio pro reo* cuando en el proceso penal no logró desvirtuarse en grado de certeza la presunción de inocencia que acompaña a todo procesado, permaneciendo la duda sobre la comisión de los hechos investigados, o sobre la culpabilidad, no quedando otro remedio que declarar la inocencia.

De esta noción se desprende que, la aplicación del principio de la duda favorable a favor del proceso, se efectuará en todo evento en el cual el juez no llegue a un convencimiento en grado de certeza que le permita más allá de toda duda, determinar la responsabilidad penal de quien es sometido a juicio. En este evento, se impone en cabeza del Estado el deber de efectuar de manera legal el recaudo probatorio que esclarezca los hechos y que permitan comprometer la responsabilidad del procesado certeramente<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> La Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula: Artículo 8. Garantías Judiciales. (...)

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad (...).

<sup>6</sup> El Pacto Internacional de derechos civiles y políticos consagra los siguiente: Artículo 14. (...)

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley (...).

<sup>7</sup> Ortega-Ruiz y Calvete Merchan proponen que el principio *in dubio pro reo* puede ser clasificado en 1) fáctico y 2) procesal. El primero hace relación a la duda sobre la certeza en la ocurrencia del hecho punible y la responsabilidad de la conducta desplegada por el ciudadano; mientras que el segundo es la materialización de la duda al momento de proferirse la sentencia por un juez colegiado “cuando no existe unanimidad en la decisión judicial por parte de los integrantes de la sala, lo cual predica la falta de certeza en la responsabilidad jurídica del procesado” (2017, pp. 7-8). Pese a lo interesante del planteamiento, esta diferenciación no influye en las conclusiones a las que se llegan en este escrito, en tanto se trata de un estudio de la forma en que se adoptan las decisiones por parte de los jueces colegiados penales, lo que en cierto punto podría generar responsabilidad civil extracontractual del Estado cuando no se trate de decisiones unánimes y uno o algunos de los miembros de los Tribunales manifiesten su desacuerdo con una

#### **1.4. ¿Cuándo es injusta la privación de la libertad?**

Como se indicó que el ejercicio de la libertad personal se puede limitar a través de la imposición de una medida de aseguramiento que corresponda a los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, la privación de la libertad será injusta en la medida que no se cumplan dichos criterios.

“El Tribunal Constitucional Español (1993) menciona que debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan –aun previstas en la Ley- privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación.” (Arenas, 2014, p. 6).

A su turno, la Corte Constitucional Colombiana (2017) ha determinado que para impedir los excesos del poder público frente al ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y determinar la constitucionalidad de los límites impuestos, las medidas adoptadas en ese sentido deben

superar el juicio de proporcionalidad y razonabilidad. Esto es, la restricción debe, cuanto menos: “(i) perseguir un fin constitucionalmente imperioso; (ii) constituir un medio adecuado e idóneo para alcanzarlo; (iii) ser necesaria, por no existir otro medio menos lesivo con igual o similar eficacia para alcanzar el fin propuesto; y (iv) debe existir proporcionalidad entre los costos y los beneficios constitucionales que se obtienen con la aplicación de la medida. (S-T-653, 2017, p. 18)

El principio de proporcionalidad, entendido como la medida justa que debe existir entre los instrumentos utilizados o adoptados y la restricción de derechos que se persigue con su utilización, con el propósito de contrarrestar una situación anormal

---

sentencia condenatoria y por el contrario consideren que se deba proferir una absolución por duda. A juicio de los autores, al presentarse esta situación al interior de las discusiones jurídicas en las que incurren los jueces colegiados, cuando uno de ellos manifieste que debe fallarse en aplicación el principio *in dubio pro reo*, porque en su parecer se presenta la duda, debe entenderse así mismo que esta interpretación del caso es la más favorable al procesado y es la que debe adoptarse en lugar de condenar.



y restablecer el orden (Carrillo y Pereira, 2017), en su aplicación dentro de la toma de decisiones de imposición de medidas cautelares personales en los procesos penales, debe adecuarse de tal manera que efectivamente se predique una razonabilidad debidamente justificada para privar del ejercicio del poder dispositivo de la libertad.

La aplicación de la proporcionalidad implica que, cuando se deba adoptar la medida restrictiva de la libertad en el ejercicio de la acción penal, dicha decisión debe estar fundamentada en que sus beneficios son superiores y razonables a la restricción que se le impone al afectado. Esta herramienta jurídica está constituida por tres subprincipios: 1. Idoneidad; 2. Necesidad y; 3. Proporcionalidad en sentido estricto.

Como lo indica Bernal Pulido (2014)

el subprincipio de idoneidad exige que la limitación sea adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. El subprincipio de necesidad exige que la limitación sea la menos gravosa, entre todas aquellas que revisten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto. El subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto exige que la limitación alcance el fin que se propone en un grado que justifique el grado en el que se limita el derecho (pp. 31-32).

En este sentido, la utilización del principio de proporcionalidad exige el desarrollo de cada uno de los tres subprincipios en el caso concreto en el que aplique, para determinar que la medida adoptada es justa. Se convierte en un criterio fundamental que permite al operador determinar que el medio adoptado resulta indispensable para asegurar fines constitucionales superiores. Al contrario, en la medida que no se logre verificar que la imposición de la medida cautelar de detención preventiva superó la verificación de tales subprincipios, no se puede hablar de proporcionalidad, por tanto, dicha decisión se torna ilegítima porque no existió justificación para la restricción del derecho.

Por otro lado, la razonabilidad corresponde a un criterio que permite efectuar la valoración sobre los argumentos adoptados para la toma de una decisión y de esta manera determinar si estos fueron, o no los correctos, dentro de las posibilidades presentes. Sin embargo, como lo afirma Bernal Pulido (2005) este concepto es problemático debido a que “no puede hablarse de un significado unívoco y constante de razonabilidad. Entre esta multiplicidad de conceptos, dos son los que adquieren mayor relieve” (p. 68) refiriéndose a la razonabilidad como concepto subsidiario de la estricta racionalidad y razonabilidad como interdicción de la arbitrariedad.

De los anteriores conceptos, se considera que el segundo de ellos es el que mejor se adapta para determinar la justicia o injusticia de la privación de libertad, esto es, razonabilidad como interdicción de la arbitrariedad. De acuerdo con esta definición “una decisión razonable es una decisión no arbitraria, es decir, fundada en una razón jurídica legítima” (Bernal Pulido, 2005. p. 69). En este sentido, una actuación se presenta irrazonable cuando la misma carezca de fundamentos jurídicos o no esté debidamente motivada.

Ahora, la aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad presenta tres niveles de intensidad: i) leve; ii) intermedio y; iii) estricto.

El primero exige que la medida persiga un fin legítimo o no prohibido por la Constitución y que sea idónea para alcanzar el fin propuesto; el segundo requiere que el fin sea legítimo y además constitucionalmente relevante, dado que la medida promueve intereses públicos que gozan de protección constitucional. Así mismo, el medio no sólo debe ser adecuado sino, en efecto, consecuente para conseguir el fin perseguido y no puede resultar desproporcionado frente al bien constitucionalmente perseguido y el sacrificado. El tercero requiere que la finalidad de la medida sea imperiosa. Por tanto, el medio no sólo debe ser adecuado y efectivamente conducente, sino necesario, en otras palabras, no debe existir un medio alternativo menos lesivo y este debe ser

estrictamente proporcional respecto de los beneficios de adoptar la medida, los cuales deben ser evidentemente superiores a las restricciones que ella impone sobre los principios constitucionales que se vieran afectados por la misma. (Corte Constitucional, S-T-653, 2017, pp. 18-19).

De acuerdo con estos niveles, sin duda la adopción de la decisión de privar preventivamente de la libertad a cualquier persona debe soportar un juicio intenso, en la medida que se trata de la restricción al ejercicio de uno de los derechos más importantes consagrado en la esfera constitucional del individuo, pues se trata nada menos, de no permitirle la autodeterminación, al confinarlo personalmente para que permanezca en un lugar determinado, que en la mayoría de los casos es una prisión.

Como lo ha determinado la Corte Constitucional (2017)

el nivel de intensidad estricto se aplica: “1) cuando está de por medio una clasificación sospechosa como las enumeradas en forma no taxativa a manera de prohibiciones de discriminación en el inciso 1º del artículo 13 de la Constitución; 2) cuando la medida recae principalmente en personas en condiciones de debilidad manifiesta, grupos marginados o discriminados, sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones o minorías insulares y discretas; 3) cuando la medida prima facie afecta el goce de un derecho constitucional fundamental; y 4) cuando se examina una medida que crea un privilegio. (S-T-653, 2017, p. 19)

De acuerdo con los anteriores criterios, cuando el Estado se vea abocado a restringir de manera provisional la libertad de cualquier persona, mientras respete los límites formales y materiales, las restricciones impuestas serán acordes con la Constitución y con los tratados internacionales de los derechos humanos, en tanto que su irrespeto conducirá a su inconstitucionalidad (Bernal y Montealegre, 2013, p. 111).

En síntesis, el ejercicio del derecho a la libertad solo podrá ser afectado por los motivos previamente determinados en la ley, respetando los postulados y preceptos constitucionales e internacionales y específicamente los principios de razonabilidad y proporcionalidad, de lo contrario, resultará injusta la privación preventiva de la libertad.

## **2. TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

### ***2.1. Breve reseña de lo que se entiende por responsabilidad civil extracontractual del Estado***

La responsabilidad civil extracontractual, generalmente es entendida como la obligación de reparar los daños causados por un agente a otro, producto de una conducta cometida por el primero. Coleman (trad. Papayanis, 2010) entiende que “en el núcleo de la responsabilidad extracontractual se encuentra la práctica que consiste en responsabilizar a las personas por las pérdidas injustas que su conducta ha ocasionado” (p. 206).

De acuerdo como lo define este mismo autor, la esencia de esta clase de responsabilidad es atribuir a los individuos las pérdidas que causan a otros, considerando que es necesario que públicamente se genere una relación entre quien daña y quien recibe el daño, a efectos que tal relación refleje la materialización de la justicia.

A nivel constitucional se determinó en Colombia que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, cuando los cause a través de sus agentes (Const., 1991, art. 90), es decir, se consagró por el constituyente una cláusula general de responsabilidad estatal para amparar a los particulares de las actuaciones del Estado cuando estas les causen daños antijurídicos.

La razón de ser de esta norma y de todo el andamiaje que se ha construido a su alrededor desde su promulgación, por parte de la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, consiste en asignarle a la administración pública

el deber de reparar los daños que cause, convirtiéndose en un “mecanismo de control y límite al poder público, que a su vez permite la garantía efectiva de los derechos constitucionales y que, de este modo, viabiliza el carácter supremo y democrático del texto constitucional” (Buitrago, 2018, p. 36).

Bajo este criterio, la responsabilidad civil extracontractual en Colombia se erige bajo los parámetros de la justicia correctiva, que como lo expresa Weinrib (trad. Fabra, 2013), tiene una función rectificatoria a través de la corrección de la injusticia que una parte le inflige a otra, con el objeto de deshacer esa injusticia.

De acuerdo con Rosenkrantz (trad. Páez Conesa, 2013), su función práctica depende del concepto de lo injusto, en consideración a que, a partir de él, la concepción determina cuando una acción o evento es indeseable, es decir, no debería ocurrir y en esta medida, otorgar incentivos y disuasiones que guíen la conducta, a efectos de evitar acciones indeseadas (p. 73).

La justicia correctiva también puede entenderse en palabras de Bernal Pulido, como “una regla jurídica existente que prescribe que los agentes tienen el deber de no dañar a otros y que, si un agente causa a otro un daño antijurídico, debe ser declarado responsable de indemnizar y reparar a la víctima” (2018, p. 409).

Teniendo en cuenta esas afirmaciones, se desprende que el criterio orientador de la mencionada cláusula de responsabilidad contenida en la carta política de 1991, es rectificar la injusticia que el propio Estado por medio de sus agentes le inflige a quien la padece, imponiéndole la carga de indemnizar, a través del respectivo reclamo elevado para tal fin, que por regla general es judicial<sup>8</sup>.

Así las cosas, la responsabilidad civil extracontractual en Colombia inicialmente fue concebida y se declaraba siempre que se comprobara la existencia de tres requisitos esenciales a saber: (i) la existencia de un daño antijurídico, esto es, un

---

<sup>8</sup> Frente a este criterio, González Medina desarrolla una postura que explica que, dada la existencia de regímenes objetivos para declarar la responsabilidad, es posible predicar que el derecho de daños en el sistema jurídico colombiano no solo se funda en los principios de la justicia correctiva, sino que esta forma de reparación obedece a una cuestión de justicia distributiva (2013, pp. 67-68).

perjuicio que el ciudadano no tenía la carga de soportar; (ii) una acción u omisión imputable al Estado y; (iii) un nexo de causalidad.

Los tres elementos mencionados anteriormente debían concurrir de manera efectiva en los juicios en los que se tenía por fin buscar la declaratoria de responsabilidad civil extracontractual del Estado, entendiendo que la ausencia de cualquiera de ellos generaba que dicha declaración no se pudiera materializar. El “Consejo de Estado (1993) establecía que la responsabilidad patrimonial del Estado se declaraba, siempre que concurrieran los siguientes elementos: un hecho dañoso imputable a la administración, un daño sufrido por el actor, que para estos efectos es quien los alega, y un nexo causal que vincula a estos; dicha causa era esencial para concluir que el daño es consecuencia directa del hecho atribuido a la administración” (Henao, 1998, p. 35)<sup>9</sup>.

Ahora, de acuerdo a la evolución conceptual que ha presentado la responsabilidad civil extracontractual, se entiende que la cláusula de responsabilidad del Estado contenida en la constitución (Const., 1991, art. 90), determina que los elementos de la responsabilidad de la administración pública son la comprobación de un daño antijurídico y la imputación de este a una autoridad estatal (Gil, 2013, p. 473; Sandoval, 2018, p. 1). De acuerdo con esta concepción, para predicar la responsabilidad extracontractual del Estado es necesario en primer lugar, que se materialice la existencia de un daño antijurídico<sup>10</sup>, y consecuentemente, determinar a quien es atribuible la causación de ese daño a través de la imputación, que tiene sentido dual, debido a que el daño debe ser fáctica y jurídicamente imputable (Gil, 2013, p. 474).

En consonancia con lo expuesto

---

<sup>9</sup> Al respecto Henao expone que el daño es un requisito indispensable más no suficiente para la declaratoria de responsabilidad, por lo que en algunos eventos no se declara la responsabilidad pese a la existencia del daño, como por ejemplo cuando el mismo no se le puede atribuir al demandado como ocurre con las causales exonerativas de responsabilidad, o cuando el daño si existe y es imputable, pero el imputado no tiene el deber de repararlo por no tratarse de una daño antijurídico y este debe ser soportado por quien lo padece (1998, p. 38).

<sup>10</sup> Diferentes definiciones de daño efectuadas por algunos tratadistas de la responsabilidad se pueden encontrar en Henao (1998, p. 84).

La imputación fáctica tiene como propósito determinar si en el plano material, mas no necesariamente causal, el daño es atribuible o no a un sujeto de derecho. Así las cosas, antes de abordar el análisis de la imputación jurídica o el fundamento de la responsabilidad, es imprescindible que la lesión o afectación antijurídica este radicada en cabeza de la entidad o sujeto pasivo de la relación. Una vez constatado lo anterior, es posible abordar el análisis sobre la imputación jurídica, esto es, si existe o no, un fundamento normativo que concrete, en el caso específico, la obligación de resarcir el daño antijurídico”. (Gil, 2013, p. 474)

García de Enterría y Fernández Rodríguez (1998) citados por Pinzón (2016) sostienen que imputar corresponde a “un fenómeno jurídico consistente en la atribución a un sujeto determinado del deber de reparar un daño, en base a la relación existente entre aquél y éste” (p. 58).

Por su parte M'Causland sostiene que la regla de responsabilidad estatal establecida a partir del artículo 90 constitucional, no deja duda que, en cada uno de los casos, para declarar la responsabilidad “deben estar demostrados sus elementos estructurales, esto es, el daño antijurídico, la acción u omisión de una autoridad pública y la existencia de una relación de imputación entre esta acción u omisión y dicho daño” (2013, p. 516).

Dados los diferentes criterios expuestos, frente a la estructura del derecho de daños en el sistema jurídico colombiano Patiño (2015) efectúa un interesante análisis en lo que denomina el trípode o el bípode de la estructura de la responsabilidad, en el que inicialmente describe como el Consejo de Estado en principio determinó que la declaración de responsabilidad extracontractual estaba sujeta a la i) existencia del daño antijurídico, ii) una acción u omisión imputable al Estado y iii) un nexo causal entre los dos primeros (trípode); sin embargo, posteriormente estableció que los elementos debían ser i) un daño antijurídico y ii) un juicio de imputación (bípode), que a su vez se divide en dos: imputación fáctica e imputación jurídica (pp. 167-178).

Dentro de su estudio, este mismo autor evidencia como el Consejo de Estado en recientes y reiteradas decisiones, por un lado, abandona el nexo causal como elemento de la responsabilidad, pero en otras sentencias, lo utiliza como sinónimo de lo que se ha denominado imputación fáctica. En definitiva, el nexo causal se utiliza en los eventos en los que “el hecho dañino se produce por una acción de la autoridad pública”, pero se abandona cuando es causado por omisión (2015, pp-173-174).

En conclusión, la responsabilidad civil extracontractual del Estado se predica de toda actuación u omisión, bien de manera ilegítima o ilegal, o ejerciendo sus funciones o actividades de forma legítima y en cumplimiento de los cometidos estatales, que genere un daño antijurídico a las personas, que se deba reparar y que le sea imputable.

## ***2.2. Títulos de imputación de responsabilidad civil extracontractual***

La jurisprudencia y la doctrina han determinado que existen varios títulos de imputación para definir la responsabilidad del Estado, cuya diferencia radica en el contexto en el que se presente el daño y de la necesidad –régimen subjetivo- o no –régimen objetivo- de analizar la acción u omisión que generó el daño.

Para “García de Enterría (1984) los títulos de imputación son aquellas circunstancias en virtud de las cuales es posible establecer una relación entre el daño y el sujeto imputado que justifica atribuir a este el deber de reparación que la antijuricidad del daño impone” (Pinzón, 2016, pp. 58-59). De acuerdo con esta teoría, imputar es encontrar la forma en la que de mejor manera se debe atribuir responsabilidad cuando con la actuación -omisiva o activa- se ha generado un daño a otro, a efectos que las condiciones iniciales antes de la ocurrencia de tal, se restablezcan a su estado original, o por lo menos a estado cercano o próximo.



De esta manera, la responsabilidad civil extracontractual del Estado puede establecerse a través de la utilización de uno de los siguientes títulos de responsabilidad<sup>11</sup>:

**a. La falla del servicio.** Sobre este título de imputación menciona Duez (1938) citado por Henao (2003, p. 62) como el mal, nulo o tardío funcionamiento del servicio público.

El mismo “Henao (2003) manifiesta que la falla en el servicio consiste en la violación de una obligación a cargo del Estado” (M’Causland, 2013, p. 517), en donde se analiza la conducta que origina el daño antijurídico demandado en responsabilidad civil extracontractual, es decir, parte de un análisis subjetivo.

**b. El riesgo excepcional.** Este título de imputación se aplica cuando el Estado ejecuta una actividad lícita riesgosa propia del uso de sus poderes o el ejercicio de sus funciones, o manipula elementos peligrosos, como por ejemplo el uso de armas de fuego o la conducción de vehículos, “produce daños a terceros, quienes, de cara a la solicitud de indemnización, deben acreditar la producción de un daño antijurídico y la relación de causalidad entre este y la acción u omisión de la entidad pública demandada” (Corte Constitucional, Sala Plena, S-SU-072, 2018, p. 58), por tanto, lo que debe probarse por parte del demandante es el daño antijurídico causado y su nexo de causalidad con el ejercicio de la actividad

---

<sup>11</sup> La jurisprudencia ha determinado que ni la Constitución ni la ley han establecido un título jurídico único de imputación de responsabilidad civil extracontractual en cabeza del Estado, por lo cual, es tarea del juez administrativo, en consideración a la situación fáctica de cada caso particular, escoger el título de imputación que mejor se adapte. Al respecto el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de fecha 19 de abril de 2012 –exp. 21.515-, citada en la sentencia del 15 de agosto de 2018 –exp. 46.947-, determinó: “En lo que refiere al derecho de daños ... el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos ‘títulos de imputación’ como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación. “En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia” (pp. 22-23).

riesgosa por parte del Estado, sin que se le exija estudiar a conducta del agente estatal para solicitar la indemnización. Esta situación ubica a este título de imputación dentro del sistema objetivo de responsabilidad.

Esta forma de imputación objetiva se presenta cuando el Estado en desarrollo de sus actividades, coloca a los particulares o a sus bienes en unas condiciones singulares, que los expone a sufrir daños que en condiciones normales no sufrirían, o que sus congéneres no van a padecer por no verse enfrentados a tal situación.

Generalmente el riesgo excepcional se configura en los casos de la conducción de energía eléctrica, o en el típico ejercicio de actividades peligrosas como la conducción de vehículos o el manejo de armas. Pero existe otra circunstancia en la que podría llegar a configurarse la responsabilidad del Estado y es en el caso de ocurrencia de los daños causados por actos violentos de terceros, conclusión a la que llega M'Causland en su estudio denominado *Responsabilidad del Estado por daños causados por actos violentos de terceros* (2013, pp.513-588), en el que determina que no es correcto como la hace el Consejo de Estado, determinar que dichas circunstancias deben ser analizadas bajo la teoría del daño especial, sino que el fundamento de la responsabilidad debe estudiarse en el régimen subjetivo de falla en el servicio o en la teoría del riesgo excepcional.

**c. El daño especial.** Esta teoría determina que la responsabilidad se predica del Estado cuando este en el ejercicio de sus actividades legítimas, somete a cualquier persona al desequilibrio de las cargas públicas y le impone una adicionales que no está en el deber jurídico de soportar.

Al respecto, el Consejo de Estado (1998) citado por la Corte Constitucional (S-SU-443, 2016, p. 41) ha determinado sobre el daño especial que

el título de imputación jurídica sobre el cual se edifica el juicio de responsabilidad para el Estado, lo constituye el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas, ocasionado por la actividad legítima de autoridades estatales (Congreso y Presidente de la República),

que causa daño antijurídico, respecto del cual, el administrado no está en el deber de soportar, pues la carga pública que debe ser colectiva, no debe correr a cargo de una persona en particular.

El Consejo de Estado (2002) citado por M'Causland (2013) refiere

En el régimen de daño especial la atribución al Estado del daño sufrido por el particular se produce al margen de la normalidad o anormalidad en la prestación del servicio, o de la existencia de un riesgo creado por la administración, pues lo relevante es que aquél sufra un daño con características de especialidad como consecuencia de la actividad estatal. Para que el demandante tenga derecho a la reparación le bastaría acreditar la existencia del daño cualificado, es decir, el daño especial, que excede las cargas que el común de las personas debe soportar y su relación causal con la actividad de la administración

En síntesis, son imputables al Estado los daños sufridos por las víctimas cuando estos exceden los sacrificios que se imponen a todas las personas y en su causación interviene una actividad estatal. (p. 536)

De acuerdo con Pinzón (2016) el daño especial se genera cuando la actividad legítima del Estado genera un daño que los particulares no están obligados a soportar por el rompimiento de las cargas públicas, “situación que escapa de la teoría tradicional –falla” (p. 146).

M'Causland determina que este título de imputación se configura

cuando existe una actuación lícita del Estado que, a pesar de ser desarrollada en interés público, esto es, en beneficio de la generalidad, causa un daño grave a una persona o a un grupo de personas que rompe la igualdad de los ciudadanos frente a las cargas públicas (2015, p. 186).

Este título de imputación de responsabilidad también se ubica dentro del sistema objetivo, teniendo en cuenta que su fin busca reparar los daños antijurídicos causados a las víctimas como consecuencia de las actividades propias del Estado, sin que para ello sea necesario examinar la conducta del agente que desplegó dichas actividades.

De esta manera, cada uno de estos regímenes permite configurar los elementos de la responsabilidad civil extracontractual del Estado en cada caso particular, tanto, si el daño se originó en una acción u omisión ilegítima, se estructura una responsabilidad por falla en el servicio, en el que es imprescindible examinar la conducta del agente dañados; en cambio, si el origen se encuentra en una actuación legítima y además riesgosa, el escenario para ventilar la responsabilidad es el riesgo excepcional al que somete el Estado a los asociados cuando ejecuta acciones catalogadas de tal manera; pero si el daño es causado así mismo por el ejercicio de una actividad legítima pero que rompe el equilibrio de las cargas públicas que se le imponen al ciudadano y se le impone a uno cualquiera una carga más gravosa con el propósito de garantizar el bienestar común, será la teoría del daño especial la que se aplique.

### ***2.3. Aproximación a la forma de imputación objetiva***

Una primera aproximación a esta clase responsabilidad puede encontrarse en la obra de Coleman, quien manifiesta que

a menudo los individuos son compensados por pérdidas que no son injustas; a veces, los individuos son obligados a reparar pérdidas, pese a que no obraron incorrectamente; u otras veces, son obligados a compensar pérdidas injustas, o no, por las que no son ostensiblemente responsables. (2010, p. 206)

De acuerdo con este postulado, la responsabilización que se endilga por la producción de un daño en algunas ocasiones sucede por el solo hecho de haber ocurrido este, en cuanto a que el obrar que lo generó no fue para nada incorrecto, aun así, se está en el deber de reparar.

La imputación objetiva, conocida también como responsabilidad sin culpa, se presenta en aquellos eventos en los cuales basta demostrar la existencia de un daño causado por el Estado, representado en sus agentes, para imputársela y condenarlo a reparar, pese a que la administración actuó adecuadamente y dentro de los parámetros establecidos en las normas que regulan su actividad.

Como lo expresa Moreno Younes,

Puede ocurrir que la administración obre adecuadamente pero que en desarrollo de su actuación cause un daño. En este caso la administración está en la obligación de indemnizarlo, porque si ella ha obrado en desarrollo del servicio y por lo tanto en interés general, no es justo ni equitativo que una sola persona lleve sobre sí todo el perjuicio causado, cuando toda la comunidad ha obtenido el beneficio común.

Con fundamento en esta tesis de la jurisprudencia, al ofendido o perjudicado con el daño le basta probar el hecho dañoso sin que se le exija demostrar ninguna clase de culpa de la administración, porque ella simplemente no existe. Le bastará probar la existencia del daño. (2016, p. 331)

Por otro lado, Buitrago indica que existen situaciones en las cuales se le impone al Estado el deber de reparar los daños causados, aun en ejercicio de su actuación legítima y conforme a derecho -sin culpa-, porque en detrimento de los particulares resulta beneficiado de su actividad, o les impone a estos, cargas públicas que no están en el deber jurídico de soportar (2018, p. 39).

Pinzón (2016) determina el régimen objetivo de responsabilidad se caracteriza porque no media dolo o culpa de los agentes estatales cuando ocurre el hecho generador del daño, tampoco se requiere que la actuación de la administración sea ilegítima, simplemente esta viene a responder cuando con su actuación se genera un desbalance en las cargas sociales y por solidaridad asume las

consecuencias del rompimiento del equilibrio de las cargas públicas al que somete a los particulares (p. 35).

Como se expuso anteriormente, el régimen de responsabilidad objetiva tiene dos formas de estructurarse, el daño especial y el riesgo excepcional, dependiendo de si se trata de un daño antijurídico generado cuando en ejercicio de las actividades propias de la administración pública, por rompimiento de las cargas públicas, o si es consecuencia de la creación de un riesgo excepcional, grave o anormal creado o el ejercicio de una actividad peligrosa a cargo del Estado.

### **3. ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DEL ESTADO EN LOS CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO**

#### ***3.1. Privación injusta de la libertad en aplicación al principio in dubio pro reo como causa o factor de atribución de responsabilidad civil extracontractual al Estado***

Como lo ha indicado la Corte Constitucional

la detención preventiva dentro de un Estado social de derecho, no puede convertirse en un mecanismo de privación de la libertad personal indiscriminado, general y automático, es decir que, su aplicación o práctica ocurra siempre que una persona se encuentra dentro de los estrictos límites que señala la ley, toda vez que la Constitución ordena a las autoridades públicas velar por la efectividad de los derechos y libertades de las personas, garantizar la vigencia de los principios constitucionales (la presunción de inocencia), y promover el respeto de la dignidad humana (preámbulo, artículos 1º y 2º) (S-C-774, 2001, pp. 56-57).

Con fundamento en este postulado, la jurisdicción contencioso administrativa debe determinar la razonabilidad y proporcionalidad de la detención preventiva y si

existieron indicios serios para ello, aun cuando la persona fue absuelta en virtud del principio *in dubio pro reo* y no se pudo desvirtuar su inocencia.

En este sentido, la privación de la libertad que no se ajuste a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad resultará siendo injusta, cuando se declare la inocencia por configuración de duda razonable en favor del procesado, convirtiéndose en factor de atribución de responsabilidad civil extracontractual.

Para Coleman la pérdida injusta es el resultado de “la vulneración de un derecho o la afectación de intereses legítimos mediante una acción incorrecta (Papayanis, 2013, pp. 18-25), por tanto, la privación de la libertad tendrá la connotación de injusta cuando la misma sea el resultado de una actuación judicial abiertamente incorrecta.

En términos de Weinrib (trad. Fabra, 2013) la responsabilidad civil extracontractual tiene como función deshacer la injusticia que una parte le ha causado a otra “dado que si el demandado, si es responsable, ha cometido la misma injusticia que el demandante ha sufrido, las únicas consideraciones relevantes para la elucidación del daño son aquellas que se aplican correlativamente a ambas partes” (p. 329), es decir, que solo existirá responsabilidad en la medida que la actuación del causante sea injusta y que esta misma injusticia se pueda predicar de quien la recibió.

Solo bajo esos criterios, la privación injusta de la libertad puede ser tenida como causa o factor de atribución de responsabilidad civil extracontractual al Estado, en la medida en que, si la detención preventiva se tornó arbitraria por ser irrazonable y desproporcionada, el Estado debe entrar a reparar los daños antijurídicos irrogados con su actuación.

### **3.2. Postura del Consejo de Estado: Entre el título de imputación objetivo y el subjetivo**

La privación injusta de la libertad en el sistema de responsabilidad civil extracontractual del Estado es uno más de los eventos en los que la Nación puede

ver comprometida su responsabilidad como consecuencia de la actuación de sus agentes judiciales.

El Consejo de Estado (1992, S-7058) en principio estimaba que

la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados (Consejo de Estado, Sección Tercera, S-46.947, 2018, p. 17).

Además, estableció que, cuando contra una persona procesada por la comisión de un delito existieran indicios serios de haberlo cometido, ella debía asumir la carga de la investigación y su privación de la libertad, aun cuando se obtuviera finalmente su absolución, la cual no constituía un presupuesto para afirmar que con la detención se había incurrido en una actuación indebida (Consejo de Estado, Sección Tercera, S-8.666, 1994).

Posteriormente, el máximo Tribunal de la Jurisdicción Contencioso Administrativo (1995, S-10.056) determinó que el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal de la época<sup>12</sup>, estableció dos circunstancias: La primera de ellas refería la consagración legal de cláusula de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. La segunda trajo consigo la incorporación de tres causales: i) absolución cuando el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió o iii) la conducta no estaba tipificada como punible. Concluyó el alto tribunal que configurada una de estas, era suficiente para predicar que la responsabilidad es objetiva. En los demás casos, incluido la absolución por aplicación del principio *in dubio pro reo*, era imprescindible probar el error judicial.

---

<sup>12</sup> En el año 1995 regía en Colombia el decreto 2700 de 1991, “Por medio del cual se expiden y se reforman las normas de procedimiento penal”.



El siguiente criterio jurisprudencial adoptado estableció que además de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del código de procedimiento penal, era procedente atribuir al estado bajo el título de imputación objetiva la responsabilidad por privación de la libertad a los eventos en que el sindicato sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del *in dubio pro reo*, apartándose de su propia doctrina que disponía que en estos eventos era indispensable probar la falla en el servicio.

A partir de la sentencia del 4 de diciembre de 2006 proferida dentro del expediente No. 13.168, el Consejo de Estado determinó que en aquellas situaciones en que cualquier persona que fuera privada de la libertad dentro de un juicio penal y finalmente resultara absuelta en aplicación del principio de *indubio pro reo*, se imputa responsabilidad civil extracontractual al Estado bajo un título objetivo.

En la mencionada providencia, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo justificó la determinación de establecer el título de imputación objetiva en estos casos, con el siguiente argumento:

resultaría desde todo punto de vista desproporcionado exigir de un particular que soportase inerme y sin derecho a tipo alguno de compensación -como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad-, el verse privado de la libertad durante aproximadamente dos años, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado prestador del servicio público de Administración de Justicia si, una vez desplegada su actividad, esta Rama del Poder Público no consiguió desvirtuar la presunción de inocencia del particular al que inculpa.

No corresponde al actor, en casos como el presente, acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la declaración de responsabilidad: actuación del Estado, daños irrogados y nexo de

causalidad entre aquella y éstos (Consejo de Estado, Sección Tercera, S-13.168, 2006, pp. 30-32).

Establecida la anterior línea jurisprudencial, en la sentencia del 31 de enero de 2011, determinó lo siguiente:

La jurisprudencia de la Sección Tercera de esta corporación es unánime en cuanto a que en dichas hipótesis la responsabilidad es objetiva, pues, la privación de la libertad es injusta, porque el sindicado es ajeno a la comisión del delito, y por esa vía a la responsabilidad penal imputada.

Aunque la Sala ha sostenido que en los casos de absolución por ausencia de pruebas, el título de imputación es el de la falla probada del servicio, en los supuestos del artículo 414 del C.P.P y en los casos de indubio pro reo, la responsabilidad se deriva a título objetivo (Consejo de Estado, Sección Tercera, S-18.626, 2011, pp. 21 y 23).

Este criterio fue adoptado con fundamento en la ley 270 de 1996, que estableció la responsabilidad patrimonial en cabeza del Estado por los daños antijurídicos que les sean imputables, como resultado de la acción u omisión de sus agentes judiciales<sup>13</sup>.

Así las cosas, al fijarse que en los casos de privación injusta de la libertad en aplicación del principio de *indubio pro reo*, el régimen de responsabilidad es objetivo. De este modo, la imputación de responsabilidad no comporta el análisis de la culpa en la conducta activa o pasiva generadora del daño, como sí es el

---

<sup>13</sup> “CAPÍTULO VI.

DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE SUS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS JUDICIALES

ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

(...)

ARTÍCULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.”

caso en el régimen subjetivo, sino que su principal argumento es que la responsabilidad se genera por el rompimiento de las cargas públicas, es decir, la demostración de que en un caso concreto se rompió de manera injustificada el principio de igualdad material de la persona frente a la ley.

De acuerdo con lo expresado, al establecerse que en los casos de privación injusta de libertad, incluso en aplicación del principio de *in dubio pro reo*, el régimen de responsabilidad aplicable es objetivo, debido a que el mismo legislador estableció que cuando la privación de la libertad se torna injustificada el Estado responde patrimonialmente, resulta irrelevante adelantar un análisis en sede el proceso contencioso sobre cuáles fueron las razones que llevaron al funcionario judicial a efectuar la detención del afectado antes de la producción de una condena penal ejecutoriada, porque ésta deviene en injusta ante el resultado de la decisión final que concluye que la Fiscalía General de la Nación no logró desvirtuar la presunción de inocencia, aun así, restringió a la persona del goce de su derecho constitucional fundamental a la libertad, causándole un daño reparable.

El 17 de octubre del año 2013 el Consejo de Estado expidió la sentencia con radicado 23.354<sup>14</sup>, con la cual unificó su jurisprudencia en relación con el título jurídico de imputación aplicable a los casos de privación injusta de la libertad de la que fue víctima cualquier persona, que fue objeto de detención preventiva en el transcurso de un proceso penal y resultó exonerada en aplicación del principio *in dubio pro reo*.

En esta decisión, se determinó que en estos casos el título de imputación de responsabilidad al Estado es objetivo, basado en el daño especial, debido a que no se requiere la concurrencia de un error judicial, de una detención arbitraria o que tenga que demostrarse que la privación de la libertad se fundó en una providencia contraria a la ley, para predicar la responsabilidad estatal y literalmente adicionó

---

<sup>14</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contenciosos Administrativo. Sala plena de la Sección Tercera. C.P. MAURICIO FAJARDO GÓMEZ.

lo anterior resulta igualmente predicable de aquellos eventos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal del sindicado privado de su libertad se sustenta en la aplicación del principio *in dubio pro reo*, más aún si se tiene en cuenta que en la mayor parte de tales casos, lo que se apreciará es que las decisiones judiciales adoptadas dentro del proceso penal respectivo resultan rigurosamente ajustadas a Derecho. Empero, la injusticia de la privación de la libertad en éstos —como en otros— eventos no deriva de la antijuridicidad o de la ilicitud del proceder del aparato judicial o de sus funcionarios, sino de la consideración consistente en que la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar los daños que le irroga una detención mientras se adelantan la investigación o el correspondiente juicio penal pero que a la postre culmina con la decisión absolutoria o pronunciamiento judicial equivalente que pone en evidencia que el mismo Estado que ordenó esa detención no pudo desvirtuar la presunción constitucional de inocencia que siempre al afectado: antes, durante y después de los aludidos investigación o juicio de carácter penal (Consejo de Estado, Sección Tercera, S-23.354, 2013, pp. 30).

De acuerdo con este postulado, la declaratoria de responsabilidad patrimonial en los casos de exoneración penal por aplicación del principio *in dubio pro reo*, se funda en que, al no poderse desvirtuar la presunción de inocencia, la privación de la libertad deviene en injusta porque es una carga que la persona no debió soportar, aun cuando la justicia penal hubiera actuado de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley, porque con su proceder, pese a ser legal, desconoció la garantía constitucional de la presunción de inocencia que se predica de todas las personas.

En esa oportunidad, el Consejo de Estado invocó que resultaría abiertamente contradictorio aducir jurídicamente que, por un lado, el Estado tenga la potestad de privar de su libertad a cualquier persona durante el transcurso de una

investigación penal, y por otro, que no esté llamado a indemnizar a esa persona cuando resulte absuelta en aplicación del principio *in dubio pro reo*, ante su evidente incapacidad de desvirtuar la condición de inocente, lo cual equivaldría a decir que la persona si estaba en el deber jurídico de soportar de soportar la detención a la que fue sometido, teniendo en cuenta que la detención preventiva “comporta la más intensa afectación del principio-derecho-valor que se encuentra en la base de la organización jurídico-política que constituye el Estado Social y Democrático de Derecho, cual es la libertad”<sup>15</sup>.

En el año 2015 determinó que cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente por virtud del *indubio pro reo*, -sin que, en cualquier caso, opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima-, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga (Consejo de Estado, Sección Tercera, S-38.252, 2015).

De esta manera, se construyó una teoría jurídica sobre la responsabilidad civil extracontractual por privación injusta de la libertad cuando penalmente se es absuelto en aplicación del principio *in dubio pro reo*, en la cual basta que se produzca la privación de la libertad de cualquier persona como consecuencia de una investigación criminal y que esta resulte favorecida con un fallo en virtud del principio citado, para atribuir responsabilidad al Estado y que este sea condenado patrimonialmente a reparar los perjuicios, siendo irrelevante estudiar la conducta del funcionario judicial que dio lugar a la captura.

De acuerdo con este postulado, se trata de una privación injusta de la libertad en la medida en que la sentencia absolutoria o preclusión de la investigación penal se de por aplicación del *in dubio pro reo*, debido a que debe entenderse que la medida provisional de privación de libertad, aun cuando cumpla las exigencias legales para adoptarla, es desproporcionada, inequitativa y rompe con las cargas

---

<sup>15</sup> Cfr. Consejo de Estado. Sentencia con radicado 23.354 de 2013.

públicas que puede soportar la persona, porque como el Estado es el titular de la acción penal, no estuvo en la capacidad de desvirtuar la inocencia del investigado.

Para el año 2018, dicha postura dio nuevamente un giro y a través de la sentencia de fecha 15 de agosto de 2018, el Consejo de Estado (S-46.947) decidió modificar su jurisprudencia en relación con el título jurídico de imputación aplicable a los casos en los cuales se reclama la reparación de daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad de una persona a la que, posteriormente, se le profiere una decisión favorable como consecuencia de la aplicación del *indubio pro reo*.

En la referida decisión, el alto Tribunal estimó que no es suficiente en el proceso de responsabilidad verificar la privación de la libertad de una persona y que el proceso penal no culmine con condena, para declarar responsable al Estado y proceder con una indemnización a favor del demandante, ya que es necesario, además, analizar la conducta de quien fue privado de la libertad para determinar si él mismo dio lugar a ella y a la apertura del proceso penal.

De acuerdo con esta línea, es preciso que la jurisdicción contencioso administrativa no solo determine que se efectuó una privación de libertad y que la persona finalmente fue absuelta como consecuencia de una duda favorable, sino que es necesario establecer si esa privación fue injusta y causó un daño antijurídico, en cuanto la declaratoria de responsabilidad no puede ser automática.

Resulta interesante como el Consejo de Estado (S-46.947, 2018) en esta última postura sentencia, determina que

“en la medida en que durante el proceso penal no se profiera una sentencia condenatoria, la inocencia del implicado se mantiene intacta; por consiguiente, si la terminación del proceso responde a su preclusión y si, por igual razón, la inocencia de la persona se sigue presumiendo, no hay cabida a hablar de un daño (mucho menos antijurídico) ni de una privación injusta de la libertad sobre la cual se pueda edificar un deber indemnizatorio fundamentado exclusivamente en la vulneración de dicha presunción” (p. 31).

De acuerdo con ello, ante la detención preventiva que termina con exoneración en aplicación de la duda favorable al implicado, su presunción de inocencia permanece incólume dado que la acción penal no llegó a otra conclusión, por ello no se podría establecer la producción de un daño antijurídico en virtud a que no se lesionó la referida garantía constitucional.

Sin embargo, no se puede perder de vista que la responsabilidad civil extracontractual que se busca sea declarada en estos casos, no es por la violación del principio de presunción de inocencia, porque como se dijo, este no logró ser desvirtuado. Lo que se pretende es el reconocimiento por la vulneración de la garantía individual de libertad personal, en tanto que el individuo fue privado de su ejercicio mientras duró la investigación penal y finalmente fue declarado inocente en aplicación del principio *in dubio pro reo*.

Concluye entonces el Consejo de Estado que no es posible incluir el estudio de la privación injusta de la libertad ante la absolución penal por duda, dentro del régimen de responsabilidad objetivo, a diferencia de los eventos en que la declaratoria de inocencia se efectúe por la no comisión del delito, porque la conducta no era delito o porque el hecho no existió, en virtud a que a que en estas tres últimas circunstancias existe una variación sustancial del fundamento fáctico y jurídico, teniendo en cuenta que la actuación penal nunca se justificó, es más, no se debió adelantar, por tanto no existieron criterios razonables y proporcionales que permitieran sostener la privación de la libertad.

Sin embargo, el máximo Tribunal en dicha providencia no despliega una argumentación que claramente describa la necesidad de estudiar estos eventos bajo el régimen subjetivo de responsabilidad civil extracontractual y no entorno al título de daño especial y parece limitar su postura al análisis de la conducta de la persona, para establecer si ella misma fue quien dio lugar a que lo privaran de la libertad, lo cual, dentro de la estructura del derecho de daños, se ubica más en el examen de la causal de eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, que en la forma de imputación de la responsabilidad.

### **3.3. Postura de la Corte Constitucional: Título de imputación subjetivo**

Por su lado, la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, por medio de la cual efectuó el control automático de constitucionalidad a la ley estatutaria de administración de justicia 270 de 1996, al hacer el análisis del régimen de responsabilidad del Estado por el ejercicio de la función judicial, específicamente de la causal por privación injusta de la libertad consagrado en el artículo 68 de la mencionada norma<sup>16</sup>, fijó como criterio de interpretación que la expresión “*injustamente*” “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido apropiada, razonada, ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria” (pp. 196-197) y agregó que de no tomarse dicho criterio, se estaría ante la posibilidad que en todos los casos de privación de libertad de una persona se califique injusta, procediendo de manera automática la reparación de perjuicios (Sentencia C-037, 1996).

De acuerdo con esta postura, explica la misma Corte que el examen de responsabilidad patrimonial del Estado en los casos de privación injusta de la libertad, debe efectuarse dentro de los parámetros fijados en su providencia, es decir, que al juez administrativo le corresponde analizar la razonabilidad y proporcionalidad de las circunstancias que dieron lugar a la detención preventiva, lo cual permite concluir que esta postura se inclina por el título de imputación subjetivo de falla en el servicio.

Recientemente, el alto Tribunal Constitucional Colombiano determinó que una lectura sistemática con las normas internas del Estado colombiano permite aceptar que el sistema normativo de protección del derecho a la libertad, solo puede considerarse completo en tanto exista la posibilidad de obtener indemnización de los perjuicios causados por la privación de la libertad, cuando se acredite que la misma fue arbitraria (Corte Constitucional, S-SU-072, 2018).

---

<sup>16</sup> El artículo 68 de la ley 270 de 1996 dispone: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.



Para apoyar su tesis, la Corte hace referencia a una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que manifestó que “para definir si una detención es arbitraria deben efectuarse valoraciones sobre la finalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida, exigencias vinculadas, además, con una motivación suficiente”<sup>17</sup>.

Debe entenderse que para examinar la responsabilidad civil extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad, es preciso determinar que la medida de detención preventiva fue arbitraria, lo cual ubica el estudio dentro del título subjetivo de responsabilidad, en la medida que para establecer la arbitrariedad, se debe llevar a cabo el análisis de la conducta del agente estatal que la ordenó, no de otra forma se puede llegar a concluir la injusticia.

En la referida decisión, la Corte al resolver dos acciones de tutela relacionadas con la solución de casos relacionados con privación injusta de la libertad por aplicación del principio *in dubio pro reo*, resueltos por la jurisdicción contencioso administrativa, estableció que el Consejo de Estado pasa por alto que cuando el daño antijurídico es ocasionado por la privación injusta de la libertad, el título preferente de imputación de responsabilidad fiscal es el de falla en el servicio y que los títulos objetivos son residuales cuando el primero resulta insuficiente para resolver la situación (Sentencia SU-443, 2016).

Con este criterio, lo que se expresa es que, en los casos de privación injusta de la libertad, es indispensable determinar lo “injusto”, estableciendo si la decisión de imponer la detención preventiva se ajustó a los postulados constitucionales y legales que permiten limitar el ejercicio de la libertad, por una parte, y por otra, efectuar el análisis de la proporcionalidad y razonabilidad de la medida.

#### **4. ¿POR QUÉ EL TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA NO ES EL MÁS ADECUADO PARA ESTRUCTURAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DEL ESTADO EN LOS**

---

<sup>17</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Yarce y otras vs. Colombia. Sentencia del 22 de noviembre de 2016.

## **CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CUANDO LA PERSONA PROCESADA FUE ABSUELTA EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO?**

Como se expuso, en el ordenamiento jurídico colombiano el derecho fundamental a la libertad no es absoluto, en cuanto el mismo puede ser objeto de limitación por expreso mandato constitucional. En consecuencia, en materia de privación injusta de la libertad por absolución en aplicación del principio *in dubio pro reo*, la injusticia no deviene por la sola declaratoria de inocencia en virtud de dicho principio, porque el Estado en el transcurso del proceso no fue capaz de desvirtuar la presunción de inocencia, sino porque la decisión de adoptar la medida cautelar de detención preventiva no se ajustó a los criterios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad.

De este modo, en sede de responsabilidad civil extracontractual es necesario determinar que la privación preventiva de la libertad resultó incuestionablemente infundada y/o arbitraria, para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, por tanto, dicha declaración no puede operar automáticamente.

Le corresponde entonces al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado del carácter injusto de la detención, es decir, que esta situación debe analizarse desde la perspectiva de la falla en el servicio, y al juez administrativo valorar cada caso concreto utilizando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad para determinar si la medida privativa fue o no constitucional y en este último evento si causó un daño antijurídico a quien reclama su indemnización.

De acuerdo con lo propuesto a lo largo de este escrito, el régimen de responsabilidad subjetivo funda sus principios en un sistema de justicia correctiva, que en términos de Weinrib (trad. Fabra, 2013) debe satisfacer dos requisitos: i) uno que surge de la correlatividad de la injusticia, que se evidencia en el incumplimiento de un deber por parte del demandado, correlativo a un derecho del demandado y; ii) los conceptos jurídicos relevantes a la responsabilidad deben interpretar la misma injusticia desde ambos lados (pp. 329-330).

En virtud de esta postura, el primer requisito permite afirmar que la justicia correctiva no tiene en cuenta la responsabilidad causada por la simple causación de un perjuicio, es decir la responsabilidad objetiva, por cuanto es necesario establecer la correlatividad entre el incumplimiento del deber del demandado y el desmedro de un derecho del demandante. No basta simplemente con sufrir el daño para irrogar la responsabilidad, sino no se evidencia la infracción de los mandatos a los que está obligado quien es objeto de la reclamación. El segundo requisito hace alusión al análisis de la responsabilidad desde el punto de vista subjetivo, porque la injusticia no se materializa simplemente con la creación de un riesgo irrazonable y no se agota con el simple suceso del perjuicio sufrido (Weinrib, trad. Fabra, 2013, pp. 330-331).

De esta manera, no se puede perder de vista cuando se trata de una privación de la libertad de cualquier persona que finalmente fue absuelta en aplicación del principio *in dubio pro reo*, el proceso penal de alguna manera u otra tuvo un sustento fáctico y probatorio, que en su momento permitió inferir la posible comisión del delito por parte de quien se le impuso la medida cautelar personal de privación de su libertad, no obstante, por alguna circunstancia se planteó una duda al juez penal en cuanto a la ocurrencia del hecho o la culpabilidad de la persona, que no dejó otro remedio que resolverla a su favor.

Esta situación debe ser valorada por el juez administrativo en el escenario del juicio de responsabilidad civil extracontractual, a efectos de determinar si la adopción de la medida de privación de la libertad se tomó con criterios de proporcionalidad y razonabilidad y si la misma causó un daño antijurídico.

Se debe recordar que uno de los elementos del derecho de daños es la existencia del daño antijurídico, es decir, aquel que la persona no está en el deber jurídico de soportar, que sea cierto y que claramente lesione un derecho, interés o bien protegido por el ordenamiento jurídico.

Así mismo, que el derecho a la libertad no reviste el carácter de absoluto por cuanto a nivel constitucional se dispuso que las personas pueden ser privadas de

su ejercicio, por decisión de autoridad judicial y por las circunstancias previamente establecidas en la ley, que en el caso colombiano, se encuentran consagradas en la legislación penal.

En este sentido, es claro que el sistema jurídico colombiano otorga a las autoridades penales la posibilidad de solicitar e imponer medidas cautelares restrictivas de libertad sobre las personas, que se justifica en la medida en que persiga un fin legítimo o no prohibido por la Constitución y que sea idónea para alcanzar el fin propuesto, es decir, la investigación de conductas en las que se vea comprometida la responsabilidad de quien es objeto de la restricción.

Como quiera entonces que, por autorización expresa de la propia carta política, la ley penal determina las circunstancias por las cuales cualquier persona puede ser privada preventivamente de su libertad, en los caso de absolución por duda favorable al implicado, es deber de la jurisdicción contencioso administrativa examinar si la conducta de la autoridad judicial que ordenó la imposición de la restricción infringió su contenido obligacional establecido en las normas que le permitieron la toma de la decisión, que no es otra cosa que probar la ocurrencia de una falla en el servicio.

Para Colautti cuando se genera un daño por una prisión preventiva dictada por error, los perjuicios obedecen a un sacrificio que el Estado ha impuesto injustamente a un individuo por una conducta reprochable de la administración de justicia y en consecuencia debe responder, postura que, en su entender, “concuerda con mejor precisión con el concepto de responsabilidad por la prestación del servicio” (2003, p. 106).

Con fundamento en dicho, resulta claro que en el evento de establecerse en el proceso de responsabilidad civil extracontractual que la actuación del funcionario judicial que ordenó la detención preventiva de la persona, se ajustó a las disposiciones normativas que permiten la imposición de dicha medida, que era competente y que además la misma se adoptó bajo los criterios de proporcionalidad y razonabilidad pese a que la decisión final fue la absolución en

aplicación del principio *in dubio pro reo*, se está ante la existencia de un daño justo o jurídicamente permitido, debido a que la decisión de privación de la libertad se llevó a cabo en respeto de las garantías individuales, bajo una actuación lícita.

Se advierte entonces que, en los casos de responsabilidad estatal por privación de libertad cuando la persona que fue objeto de la misma obtiene una sentencia penal a favor por duda, la injusticia no se predica automáticamente por ese solo hecho, por tanto, el análisis de la responsabilidad no se agota con la sola comprobación de la privación de la libertad y la sentencia absolutoria, es decir, bajo un régimen objetivo, sino que en todo caso es necesario demostrar el incumplimiento de los deberes constitucionales y legales por parte de quien impuso la medida, teniendo en cuenta que la forma en que ocurren los hechos resulta ser definitiva para estructurar los elementos de la responsabilidad.

## **5. CONCLUSIONES**

Como se vio, la libertad en el Estado Colombiano posee tres atributos a saber: i) principio, ii) valor y iii) derecho fundamental. En cuanto a derechos fundamental, consiste en la posibilidad que se otorga a los individuos de auto determinarse, realizar su voluntad o no ser obligados a actuar como no se quiere.

No obstante, dicha posibilidad no es absoluta y debe ser regulada y limitada por el Estado, a efectos de evitar el caos por el ejercicio ilimitado de la libertad de todas las personas. Uno de estos escenarios se refleja en la detención preventiva en el ejercicio de la acción penal por parte del Estado que la Constitución Política expresamente determina y que solo puede darse cuando por motivos fundados se deba acudir a dicha figura, cumpliendo siempre y de manera rigurosa los requisitos de i) haber sido ordenada por mandato de autoridad judicial competente, ii) con las formalidades legales y iii) por motivos previamente determinados en la ley.

El incumplimiento de tales condiciones por parte del Estado puede generar responsabilidad civil extracontractual atribuible a este, por la privación injusta de la libertad de la que es objeto cualquier persona, cuando el resultado de la actuación

penal concluya con su absolución, que entre otras circunstancias, puede obedecer a la aplicación del principio *in dubio pro reo*, que materializa el derecho de presunción de inocencia y que se concreta básicamente cuando, una vez adelantado todo el juicio, existe duda en la existencia del hecho o la participación de la persona en el mismo, por lo que no queda más remedio que exonerarlo.

En este sentido, la privación injusta de la libertad puede ser tenida como causa o factor de atribución de responsabilidad civil extracontractual al Estado, cuando la imposición de la medida cautelar personal la detención preventiva se torne arbitraria por ser irrazonable y desproporcionada, caso en el cual, el Estado debe entrar a reparar los daños antijurídicos generados con su actuación.

Sin embargo, la imputación de responsabilidad al Estado no puede efectuarse de manera automática bajo el título de responsabilidad objetiva en la modalidad de daño especial como reiterativamente lo ha ordenado el Consejo de Estado, por el solo hecho de ser favorecido con una sentencia absolutoria aplicación del *in dubio pro reo*, porque como se estudió, la privación injusta de la libertad en estos casos solo es injusta en la medida que se demuestre que la imposición de la restricción a la libertad personal sucedió desconociendo los criterios de proporcionalidad y razonabilidad que se deben tener en cuenta para adoptar ese tipo de decisiones.

De acuerdo con lo anterior, el título de imputación que se considera es el más adecuado para estudiar estos casos es el subjetivo de falla en el servicio judicial, en virtud a que la imposición de medida privativa de la libertad en desarrollo de un proceso penal, por sí sola no constituye el rompimiento de las cargas públicas cuando se obtiene una sentencia judicial favorable en aplicación del referido principio, por tanto, es necesario que el Juez administrativo valore si la adopción de tal medida fue o no proporcional y razonable.

Para ello, en el evento de establecerse en el proceso de responsabilidad civil extracontractual que la actuación del funcionario judicial que ordenó la detención preventiva de la persona, se ajustó a las disposiciones normativas que permiten la imposición de dicha medida, que era competente y que además la misma se

adoptó bajo los criterios de proporcionalidad y razonabilidad pese a que la decisión final fue la absolución en aplicación del principio *in dubio pro reo*, se está ante la existencia de un daño justo o jurídicamente permitido, como quiera que la decisión de privación de la libertad se llevó a cabo en respeto de las garantías individuales, bajo una actuación lícita, de tal suerte que, la injusticia no se predica automáticamente por el solo hecho de obtener una sentencia penal favorable, debido a que el análisis de la responsabilidad no se agota con la sola comprobación de la privación de la libertad y la sentencia absolutoria, es decir, bajo un régimen objetivo, sino que en todo caso es necesario demostrar el incumplimiento de los deberes constitucionales y legales por parte de quien impuso la medida, teniendo en cuenta que la forma en que ocurren los hechos resulta ser definitiva para estructurar los elementos de la responsabilidad.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- Arenas Guarín, Sofía. (2014). *El indubio pro reo como fundamento de la responsabilidad del estado en los casos de privación injusta de la libertad*. (Tesis de Maestría). Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia.
- Berlin, Isaiah. (1958). *Dos conceptos de libertad*. Oxford. Recuperado de <https://wold.fder.edu.uy › rrl › isaiah-berlin-dos-conceptos-de-libertad-1858>
- Bernal Cuellar, Jaime y Montealegre Lynett, Eduardo. (2013). *El proceso penal. Tomo I. Fundamentos constitucionales y teoría general*. Sexta edición. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Bernal Pulido, Carlos. (2005). *El derecho de los derechos*. Quinta reimpresión, febrero 2008. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Bernal Pulido, Carlos. (2014). *El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. El principio de proporcionalidad como criterio para determinar el contenido de los derechos fundamentales como criterio vinculante para el legislador*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

- Bernal Pulido, Carlos. (2018). *Derechos, cambio constitucional y teoría jurídica escritos de derecho constitucional y teoría del derecho*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Buitrago Quintero, Angélica María. *Responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia y Constitución democrática*. Revista Verba Iuris, 14 (41). pp. 15-45.
- Carrillo De La Rosa, Yezid & Pereira Blanco Milton. (2017). *Principio de proporcionalidad, argumentación jurídica y potestad discrecional de la administración pública: análisis desde los límites a los derechos y garantías fundamentales*. Universidad Externado de Colombia. Revista digital de derecho administrativo, No. 18, segundo semestre, (pp. 65-83). Recuperado de:  
<https://revistas.ueexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/5006/5994>.
- Chinchilla Herrera, Tulio Elí. (1999). *¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales?* Bogotá: Editorial Temis S.A.
- Colautti, Carlos E. (2003). *Responsabilidad del Estado Problemas Constitucionales*. Buenos Aires: Rubinzal - Culzoni editores.
- Coleman, Jules L. (2010). *Riesgos y daños*. [Traducido al español de Risks and Wrongs] (Diego M. Papayannis, Trad.). Madrid España: Marcial Pons.
- Consejo de Estado, Sección Tercera. (16 de abril de 1993). Sentencia 7.124. [M.P. Juan de Dios Montes Hernández].
- Consejo de Estado, Sección Tercera. (25 de julio de 1994). Sentencia 8.666. [M.P. Carlos Betancur Jaramillo].
- Consejo de Estado, Sección Tercera. (17 de noviembre de 1995). Sentencia 10.056. [M.P. Carlos Betancur Jaramillo].
- Consejo de Estado, Sección Tercera. (4 de diciembre de 2006). Sentencia 13.168. [M.P. Mauricio Fajardo Gomez].



Consejo de Estado, Sección Tercera. (31 de enero de 2011). Sentencia 18.626. [M.P. Stella Conto Diaz del Castillo].

Consejo de Estado, Sección Tercera. (17 de octubre de 2013). Sentencia 23.354. [M.P. Mauricio Fajardo Gómez].

Consejo de Estado, Sección Tercera. (26 de agosto de 2015). Sentencia 38.252. [M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera].

Consejo de Estado, Sección Tercera. (15 de agosto de 2018). Sentencia 46.947. [M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera].

Convención Americana de Sobre Derechos Humanos. (1969). Recuperado de [http://www.oas.org/dil/esp/tratados\\_B-32\\_Convencion\\_Americana\\_sobre\\_Derechos\\_Humanos.htm](http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm).

Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión. (05 de junio de 1992) Sentencia T-406. [M.P. Ciro Angarita Barón].

Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión. (24 de junio de 1992) Sentencia T-426. [M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz].

Corte Constitucional, Sala Plena. (02 de agosto de 1993) Sentencia C-301. [M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz].

Corte Constitucional, Sala Plena. (05 de febrero de 1996). Sentencia C-037. [M.P. Vladimiro Naranjo Mesa].

Corte Constitucional, Sala Plena. (10 de julio de 1997) Sentencia C-327. [M.P. Fabio Morón Díaz].

Corte Constitucional, Sala Plena. (25 de julio de 2001) Sentencia C-774. [M.P. Rodrigo Escobar Gil].

Corte Constitucional, Sala Plena. (12 de julio de 2005) Sentencia C-730. [M.P. Álvaro Tafur Galvis].

Corte Constitucional, Sala Plena. (18 de agosto de 2016) Sentencia SU-443. [M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado].

Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión. (2017). Sentencia T-653. [M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo].

Corte Constitucional, Sala Plena. (05 de julio de 2018) Sentencia SU-072. [M.P. José Fernando Reyes Cuartas].

Constitución política de Colombia. [Const.] (1991) Legis.

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. (1789). Recuperado de <https://democraciaparticipativa.net/documentos-data-a-referenda/documentos-en-espanol/documentos-sobre-derechos-humanos/10371-declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano-1789.html>

García Jaramillo, Leonardo. (2016). *Dos conceptos de libertad, de Isaiah Berlin*. Recuperado de <https://www.ambitojuridico.com/noticias/administrativo-y-contratacion/dos-conceptos-de-libertad-de-isaiah-berlin>

Gil Botero, Enrique. (2013). *La teoría de la imputación objetiva en la responsabilidad extracontractual del Estado*. En Bernal Pulido, Carlos y Fabra Zamora, Jorge. (eds.), *La filosofía de la responsabilidad civil, Estudios sobre los fundamentos filosófico-jurídicos de la responsabilidad civil extracontractual* (pp. 471-511). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

González Medina, Diego Andrés. (2013). *Responsabilidad extracontractual ¿una cuestión de justicia correctiva o distributiva? Notas sobre las funciones de la responsabilidad extracontractual*. (Tesis de Maestría). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Hart H. L. A. and Honoré Tony. (1994). *Causación in the law*. Second Edition. Oxford: Clarendon Press.

- Henao, Juan Carlos. (1998). *El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho Colombiano y Francés*. Segunda reimpresión, abril de 2007. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Henao, Juan Carlos. (2003). *La noción de la falla del servicio como violación de un contenido obligacional a cargo de una persona pública en el derecho colombiano y en el derecho francés*. En Estudios de derecho civil, obligaciones y contratos. Tomo III. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Henao, Juan Carlos. (2015). *Las formas de reparación en la responsabilidad del Estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones contra el Estado*. Revista de Derecho Privado, (28). Universidad Externado de Colombia, pp. 277-366. DOI: 10.18601/01234366.n28.10
- M'Causland Sánchez, María Cecilia. (2013). *Responsabilidad del Estado por daños causados por actos violentos de terceros*. En Bernal Pulido, Carlos y Fabra Zamora, Jorge. (eds.), *La filosofía de la responsabilidad civil, Estudios sobre los fundamentos filosófico-jurídicos de la responsabilidad civil extracontractual* (pp. 513-588). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- M'Causland Sánchez, María Cecilia. (2015). *Responsabilidad objetiva del Estado: tendencias, deseos y realidades*. En Henao, Juan Carlos y Ospina Garzón, Andrés Fernando (eds.). *La Responsabilidad extracontractual del Estado. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hasta dónde? XVI Jornadas Internacionales de Derecho administrativo* (pp. 181-233). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Naranjo Mesa, Vladimiro. (2014). *Teoría constitucional e instituciones políticas*. Décima edición. Bogotá Colombia: Editorial Temis S.A.
- Ortega-Ruiz, Luis Germán y Calvete Merchán, Ricardo. (2017). *El principio del in dubio pro reo en las sentencias proferidas por jueces penales colegiados frente a la responsabilidad del Estado*. Revista de Derecho Público, (38).

Universidad de los Andes (Colombia).  
<http://dx.doi.org/10.15425/redepub.38.2017.05>

Osuna Patiño, Néstor Iván. (2017). *Derechos y libertades constitucionales*. En Correa Henao, Magdalena, Osuna Patiño, Néstor Iván y Ramírez Cleves, Gonzalo (eds.). *Lecciones de derecho constitucional tomo I* (pp. 343-383). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (1966). Recuperado de <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>.

Papayanis, Diego M. (edt.). (2013). *El derecho de daños, principios morales y justicia social*. Madrid: Marcial Pons.

Patiño Domínguez, Hector Eduardo. (2015). *El trípode o el bípode: la estructura de la responsabilidad*. En Henao, Juan Carlos y Ospina Garzón, Andrés Fernando (eds.). *La Responsabilidad extracontractual del Estado. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hasta dónde? XVI Jornadas Internacionales de Derecho administrativo* (pp. 165-180). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Pinzón Muñoz, Carlos Enrique. (2016). *La responsabilidad extracontractual del Estado una teoría normativa*. Segunda edición. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez.

Ramírez Bulla, Germán. (2017). *Elementos del Estado: la población*. En Correa Henao, Magdalena, Osuna Patiño, Néstor Iván y Ramírez Cleves, Gonzalo (eds.). *Lecciones de derecho constitucional tomo I* (pp. 183-204). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Rosenkrantz, Carlos (2013). *Una revisión de la concepción compensatoria de la justicia correctiva*. En Papayanis, Diego M. (ed.), *El derecho de daños, principios morales y justicia social* (pp. 61-80). Madrid: Marcial Pons.

- Sandoval Peña, Víctor Andrés. (2018). *“La mitigación del perjuicio a cargo de la víctima en la responsabilidad extracontractual del Estado”*. (Tesis de Maestría). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. (2017). *Compendio de derecho administrativo*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Toro Lucena, Oscar Augusto y Cajicá Eduardo. (2016). *Código Penal Ley 599 de 2000 Códigos de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004 Ley 600 de 2000*. Undécima edición. Bogotá Colombia: Ediciones Nueva Jurídica.
- Vila Casado, Iván. (2012) *Fundamentos del derecho constitucional contemporáneo*. 2ª ed. Colombia: Legis.
- Weinrib, Ernest J. (2013). *Responsabilidad extracontractual como justicia correctiva*. En Bernal Pulido, Carlos y Fabra Zamora, Jorge. (ed.(s)), *La filosofía de la responsabilidad civil, Estudios sobre los fundamentos filosófico-jurídicos de la responsabilidad civil extracontractual* (pp. 325 -334). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Younes Moreno, Diego. (2016). *Curso de derecho administrativo*. Décima edición actualizada. Bogotá: Editorial Temis.